

Agendas emergentes (y re-emergentes)

por CLAUDIO FUENTES S. | Universidad Diego Portales, Chile | claudiofuentes.saavedra@gmail.com

Mi reflexión sobre lo nuevo o emergente en las ciencias sociales demanda un reconocimiento inicial de ignorancia y modestia. Ignorancia porque seguramente mucho de lo que se ha escrito sobre una variedad de temas no ha pasado por mis manos; y modestia, porque los marcos analíticos y teóricos aprendidos en mi disciplina (la ciencia política) limitan los enfoques y visiones que como investigadores tenemos sobre los fenómenos sociales.

Cuando se nos pregunta sobre las “emergencias,” instintivamente solemos responder aludiendo ya sea a redefiniciones teórico-conceptuales, las agendas o temáticas que van guiando nuestros proyectos de investigación, y la forma en que encaramos el trabajo investigativo (el método). Desde el punto de vista teórico, no cabe duda que asistimos a un intenso debate de re-conceptualización de clásicos conceptos de democracia, ciudadanía y democratización. Los ya clásicos estudios sobre transición y consolidación democrática dieron paso a una revisión de la forma en que conceptualizábamos tales procesos, lo que nos llevó a la famosa “democracia con apellidos”: democracia iliberal, democracia delegativa, y hasta el más reciente “autoritarismo electoral”.

Pero esta rica batería de conceptos no logra capturar una serie de procesos políticos y sociales simultáneos que caracterizan a nuestros sistemas políticos. Tampoco el fin normativo esperado (tener “democracias consolidadas”) es alcanzado. Los estudiosos que imaginaron condiciones necesarias y suficientes para la consolidación democrática se enfrentan hoy a paradojas que develan la debilidad de los marcos analíticos por contruidos. Quizás el ejemplo más evidente de ello es el caso de Chile. Hasta hace cinco años, Chile era observado como una democracia

consolidada que se graficaba en una transición pacífica unido a un proceso de modernización económica y social exitosa. ¿Qué explicaba este proceso? La fuerte institucionalidad de los partidos, una cultura política de negociación y acuerdo, y la tecnificación de las élites que condujeron el proceso, entre otros factores.

La irrupción de protestas sociales en el año 2011 y sucesivos escándalos de corrupción en el sector público y privado derribaron rápidamente los supuestos sobre los que se construyó el paradigma chileno. Recientes estudios han mostrado la debilidad institucional de los partidos, la fuerte captura de ciertos grupos políticos por parte del gran empresariado, el personalismo o clientelismo político a nivel local y la emergencia de nuevos movimientos sociales completamente desconectados de la “vieja política”. Ni la democracia chilena era tan “democrática”, ni su proceso político estaba tan “consolidado”. Solo unos pocos lograron anticipar la crisis de legitimidad del sistema político actual. Así, hoy revisamos nuestra conceptualización de democracia y de consolidación democrática a la luz de procesos sociales emergentes que golpean al sistema político como un todo.

Desde el punto de vista temático, las agendas de investigación —como suele suceder— están marcadas por las coyunturas sociales y políticas locales, regionales y globales. Al respecto, la irrupción de protestas en países de ingreso medio sin duda han marcado una agenda de trabajo académica reciente. ¿Cómo caracterizar estos “nuevos” movimientos? ¿Cómo se organiza y dinamiza la acción colectiva? ¿Cuáles son los impactos directos e indirectos en el proceso político? ¿Hasta qué punto estos movimientos están vinculados inter-estatalmente? ¿Existe aprendizaje? ¿Bajo qué circunstancias un

movimiento se institucionaliza? A los ahora clásicos movimientos indígenas, de derechos humanos y de mujeres, se suman movimientos territoriales subnacionales, medioambientales y por la diversidad sexual, entre otros.

Otro ámbito de estudios se refiere a los mecanismos de acción no electoral de la arena política. Hasta hace muy poco, la mayoría de los científicos sociales se preocupaba particularmente del vínculo entre electores —partidos políticos— Estado. Escándalos políticos de corrupción en varios países han estimulado una agenda de investigación que parece obvia: el vínculo formal e informal entre el sector privado, la política y el Estado. La relación dinero y política en sociedades desiguales se constituye en un ámbito clave y que se materializa en su versión extrema en la cooptación o captura del sistema político por parte de grandes grupos de poder (empresarial, carteles de droga, etc.), y en su versión menos radical en la incidencia formal e informal de grupos de poder sobre los actores políticos. Esto nos obliga a retomar clásicos supuestos de la teoría de recursos de poder y reelaborarlos en contextos políticos actuales: ¿Es la reducción de la pobreza —no así de la desigualdad— el resultado de una particular distribución de poder? En condiciones donde la política es financiada privadamente, ¿de cuánta autonomía real gozan los sistemas políticos? ¿Pueden las diferencias de desigualdad entre países — pensemos en Argentina, Uruguay y Chile— explicarse por este tipo de factores?

En contextos de debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y de menor ideologización, el estudio de los “intereses” materiales y particulares cobra particular relevancia. Se trata de un reto académico de mayor magnitud por cuando resulta de alta complejidad develar los intereses detrás

de una decisión de política pública en sociedades donde la transparencia es la excepción más que una regla. Sin embargo, parece oportuno imaginar estrategias de investigación que permitan detectar y sistematizar la forma en que se materializan los intereses económicos en el sistema político. Resulta sorprendente, por ejemplo, la escasez de trabajos en América Latina referidos al financiamiento de la política, el vínculo entre grupos económicos y élites políticas y los mecanismos de incidencia de grupos de poder económico en el proceso político.

Asociado a lo anterior, otra de las interrogantes emergentes se vincula con las consecuencias o impacto de las transformaciones recientes en la redistribución de poder social y político. Numerosos estudios se han realizado sobre las condiciones que han permitido la ampliación de derechos sociales y/o políticos y culturales. ¿Por qué y bajo qué condiciones se avanzó desde políticas sociales focalizadas a una de tipo universal? ¿Qué actores incidieron en el proceso y cómo lo hicieron? Pues bien, menos trabajo se ha realizado sobre el impacto que ha tenido esta redistribución de poder social. ¿Afectan las políticas sociales universales la tradicional relación entre la ciudadanía y los intermediadores de política pública? ¿Existe un empoderamiento ciudadano al avanzar en políticas universales? ¿Se produce un efecto de imitación de un sector (salud, por ejemplo) a otro (educación, por ejemplo)? ¿Cómo se materializa la implementación de nuevos beneficios sociales? ¿Cómo los actores políticos se “reacomodan” en este nuevo contexto donde teóricamente pierden poder frente a la sociedad? ¿Cómo dar sentido a políticas sociales implementadas de carácter universalista que conviven con estructuras de poder altamente desigual?

Las tensiones políticas que podrían derivarse de aquella ecuación (una ciudadanía más empoderada en contextos de alta desigualdad económica y social) son evidentes. Nuestra agenda de investigación ha estado marcada por una parte de ecuación: la llegada y mantención de la izquierda al poder político. En efecto, numerosos estudios se han realizado sobre las condiciones que han permitido aquel resultado político y las variantes de aquella “izquierda”. Mucho menos trabajo se ha desarrollado sobre el otro segmento de la ecuación: el poder económico y la derecha política. Aunque varios autores han retomado esta agenda, se necesita explicar con mayor exactitud los mecanismos y estrategias de sustento de la derecha como fuerza política. Si en varios países latinoamericanos la derecha utilizó en el pasado a los militares como instrumento para evitar cambios en la distribución de poder, y si hoy los militares están fuera de la escena política, ¿Qué estrategias entonces utilizan para promover sus intereses?

Un ámbito fundamental a retomar en nuestra agenda dice relación con la interfase nacional/global. Sabemos que existe un vínculo entre procesos locales/nacionales y las tendencias globales en el campo de la producción de ideas, de acción colectiva social y a nivel político. Estudios anteriores convincentemente sistematizaron de lo local en lo global y vice-versa. Hoy es necesario retomar esta agenda dados los avances tecnológicos recientes y las dinámicas propias de ciertos procesos políticos y sociales. La pregunta ya no es si ciertas ideas o procesos políticos “viajan” o producen efecto de “contagio”, sino más bien qué aspectos viajan y cómo se materializan tales dinámicas. Al respecto, necesitamos profundizar estudios asociados a “capital político” desarrollada por algunos autores en la región. Así como en el pasado la escuela de “Chicago” se

constituyó en la cuna de ideas que luego viajaron a través de la región; hoy la pregunta es: ¿existe un símil de este tipo de incidencia ideacional en el campo de la economía, del derecho o de las políticas públicas? ¿Dónde las nuevas élites están renovando sus ideas?

Pero además, conceptualmente necesitamos revisar las clásicas dicotomías de lo nacional/global; lo nacional/subnacional; y lo nacional/identitario. En un marco más interconectado, eventualmente estas dicotomías podrían ser artificios analíticos poco útiles para comprender la realidad: lo nacional no necesariamente es antagónico con lo global, las demandas territoriales subnacionales no necesariamente son opuestas a la pertenencia a un todo nacional; la demanda identitaria indígena puede perfectamente convivir con pertenencias múltiples nacionales y/o globales. Si las fronteras parecen más permeables, entonces también nuestras categorías analíticas debiesen ser más flexibles.

Otra de las dimensiones sociales que no puede quedar fuera de nuestras reflexiones dice relación con la violencia en contextos democráticos. Esta dimensión ha estado muy presente en los análisis de la violencia derivada de la producción y tráfico de drogas y sus consecuencias en el Estado. Pero también encontramos procesos de violencia radical en contextos de protesta social. Sociológicamente, algunos autores la han caracterizado como respuestas anárquicas, anómicas, de individuos u organizaciones asistémicas sin una agenda particular ¿Cómo dar sentido a estos fenómenos y qué impactos provocan en el sistema político? ¿Se trata de expresiones de descontento radical frente a un modelo económico excluyente? ¿Qué efectos tienen este tipo de respuestas en los sistemas

políticos en particular; y en el Estado en general?

Áreas de estudio específicas que merecerían retomarse dicen relación con las instituciones militarizadas (policías y fuerzas armadas) en un contexto democrático pero donde no se ha logrado un suficiente control civil sobre ellas. Ahora bien, si las sociedades advierten progresos materiales significativos; si la ciudadanía se muestra más empoderada; si el Estado asume estándares de mayor transparencia; si el debate “valórico” revisa patrones tradicionales en temas de homosexualidad, homoparentalidad, relaciones de género, etc., entonces ¿Cómo las instituciones armadas responden a este nuevo contexto social? ¿Permean los cambios sociales las instituciones militarizadas? Si así ocurre, ¿Cómo se da ese cambio? La adaptación/resistencia de instituciones tradicionales a nuevos estándares democráticos parece ser un campo relevante para ser explorado.

Otro campo de fértil producción se asocia con el estudio de las luchas de los pueblos indígenas en contextos democráticos. Se trata de una agenda que, ya por décadas, investigadores e investigadoras han venido reflexionando y desarrollando conceptual y empíricamente. Pero hoy, la agenda ya no solo se acota a la temática indígena en cuanto movimiento social sino que además respecto de las dinámicas de interacción entre indígenas y no indígenas (interculturalidad), la forma en que el Estado responde a las crecientes demandas de reconocimiento y autodeterminación, y los mecanismos en que se procesan políticamente estas demandas. Nuevamente, el tema también se asocia con una discusión más global del modelo económico extractivista dominante en la región y la explotación de recursos naturales derivada de aquel modelo.

En síntesis, el viejo problema de la desigual distribución de poder continuará marcando nuestra agenda de investigación. En un contexto caracterizado por enormes desigualdades sociales, la pregunta central seguirá refiriéndose a la forma en que se adquiere una completa ciudadanía en un marco de desigualdad económica, social y de género. Las tensiones que hoy observamos en diferentes contextos nacionales y subnacionales precisamente parecen ser reflejo de un dinámico ciclo transformador que ocurre en democracia. Las ciencias sociales tienen el desafío no solo de explicar la profundidad de estos cambios sino que entender las consecuencias y dilucidar sus efectos en el sistema político. En este sentido, desde el Sur, comienzan a explicitarse preguntas relevantes para los emergentes desafíos que impone el contexto político y social actual.

Santiago, marzo de 2015

Nota

El autor agradece los comentarios e insumos para elaborar este artículo de Cristóbal Rovira, Mauricio Morales, Carlos Cantillana, Rossana Castiglioni y Alfredo Joignant. El autor es el único responsable del producto final. ■